

Reacción de Europa ante la crisis: retos y oportunidades, discursos políticos, populismos y hospitalidad

OTRAS CONTRIBUCIONES A LA MESA REDONDA
DEL CURSO DE VERANO DE LA UPV-EHU 2016

Patricia Bárcena García
Directora de CEAR

A) Europa reacciona ante la crisis ¿Qué crisis?

Resulta sorprendente pensar y por ello se hace necesario ponerlo en evidencia que pese a que la guerra de Siria comenzó en el año 2011, hasta que no se ha generado una crisis humanitaria sin precedentes desde la II Guerra Mundial, con más de 200.000 personas muertas y 11 millones que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, Europa no ha reaccionado.

Y la **primera reacción no fue para proteger a las personas sino para protegerse a sí misma**. Se hacía preciso para ello, **aumentar el control de las fronteras** y alertar a la ciudadanía de los peligros que podría acarrear la presencia en Europa de las personas refugiadas. Escuchamos entonces frases como que “los refugiados son como goteras” o que “entre los refugiados se podían colar yihadistas a Europa”. **Criminalizando** de manera totalmente irresponsable a quien huye y tiene derecho a la protección internacional.

La sorpresa inicial se torna en vergüenza, si se pone en contexto lo que está sucediendo en el mundo. El conflicto sirio se une a otros muchos conflictos y a otras violaciones de derechos humanos que obligan a las personas a huir en busca de protección y que han generado **65 millones de personas refugiadas y desplazadas internas, según datos del ACNUR**. Pese a la alarma generada en Europa, no todas las personas van a llegar a sus costas ni a sus fronteras. La mayoría se quedan cerca de su lugar de origen con la esperanza de regresar cuanto antes a sus hogares. Países con menos recursos que cualquiera de los europeos, como Libia, Turquía, Líbano o Irak, acogen a un número de personas refugiadas muy superior al que llega a la totalidad de Europa.

En este contexto debemos valorar la respuesta de toda una Unión de países y de España **frente a una mal llamada “crisis de personas refugiadas” tras la que se esconde una “crisis de la política europea y de los valores que sustentan la Unión”**.

Las posiciones adoptadas en los últimos meses han puesto en evidencia que el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que comenzó a gestarse con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam y que aspiraba a conformar un espacio de seguridad y libertad para las personas en busca de protección, no ha pasado de ser la aspiración de unos pocos.

Los mecanismos de control y de externalización de fronteras han primado frente a la protección y la acogida teniendo como resultado la construcción de más vallas, la adopción de acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito para que se ocupen del control de la

salida de las personas, o para la recepción de quienes son expulsados independientemente de la nacionalidad y la implantación de sofisticados sistemas de vigilancia que dificultan la llegada de personas necesitadas de protección internacional a países seguros.

La externalización de fronteras se ha convertido además en un gran negocio. El negocio de la seguridad. Los Estados miembros de la UE han construido más de 235 km de vallas en las fronteras exteriores de la UE, que han costado más de 175 millones de euros. España fue pionera en el uso de las cuchillas en las vallas y por ello, el mismo grupo empresarial que las instaló en Ceuta y Melilla, a lo largo de 2016 las ha instalado en las vallas de Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos o Turquía, obteniendo grandes beneficios (Para la valla de Melilla, la empresa instaló concertinas por valor de 700.000 euros. Para la de Ceuta fueron 405.000 euros).

A este negocio se unen el de la militarización de las fronteras, el lobby armamentístico, los más modernos sistemas de vigilancia; cámaras térmicas, sistemas de detección de latidos, sensores etc.. Mecanismos todos en los que se invierten millones de euros cada año y que tienen como consecuencia el desvío de las rutas de las personas que buscan protección hacia otras cada vez más peligrosas y mortales. En el año 2015, se calcula que ha habido alrededor de 3.700 personas que han muerto en el mediterráneo y en el **2016, pese a que aun no ha terminado el año, ya son 3.800 las personas fallecidas.** El número más alto jamás registrado.

Sin una política común de asilo y migración que priorice los derechos humanos y los mecanismos de protección (tanto ordinarios como extraordinarios), no solo seguirán muriendo personas en el mar sino que también se hundirá el proyecto europeo.

Es necesario y urgente incorporar un enfoque de derechos humanos en las políticas de la unión. Recuperar los valores fundacionales y crear un verdadero espacio de libertad y protección. La externalización de las fronteras y la falta de vías seguras de acceso a la protección favorecen la violencia contra las mujeres.

Cuando los cada vez más complejos trayectos migratorios los protagonizan mujeres, están profundamente atravesados por la violencia física y sexual, principalmente en lugares fronterizos. También por su invisibilización. Ya en el año 2014, desde CEAR-Euskadi denunciábamos en nuestro informe *“El camino sin fin; huellas de Mujeres en la Frontera Sur”* las violaciones sistemáticas que sufrían y sufren las mujeres víctimas de las mafias que cruzan África rumbo a España, su situación de invisibilidad y su extrema vulnerabilidad. Mujeres, entre las cuales cada vez hay más menores, que son explotadas por las redes de trata con fines de explotación sexual.

Resulta especialmente grave recordar que muchas de estas mujeres huyen de persecuciones de género como; la violencia intrafamiliar, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o de contextos de guerra y violencia generalizada donde sus cuerpos son utilizados como campos de batalla.

En enero de 2016, Amnistía Internacional entrevistó en el norte de Europa a 40 mujeres y niñas refugiadas, que habían ido de Turquía a Grecia para después cruzar los Balcanes. *“Todas ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras durante el viaje. Muchas denunciaron que, en casi todos los países por los que habían pasado, los traficantes, el personal de seguridad u otros refugiados las habían sometido a malos tratos físicos y explotación económica, las habían manoseado o las habían presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos.”*

La violencia contra las mujeres en las rutas migratorias son una constante. No adoptar vías seguras de tránsito y acceso al destino favorece el actuar de las mafias y la impunidad de la violencia.

Es necesario y urgente abrir corredores humanitarios, facilitar visados en embajadas y consulados, cumplir con los compromisos de reubicación y reasentamiento, y adoptar otras alternativas que favorezcan vías seguras de acceso a la protección.

Ahora que se habla de “refugiados” en la calle, en las mesas políticas y en los medios de comunicación, no vaciemos el concepto de contenido.

Son muchas las voces que actualmente hablan de “refugio”, de “personas refugiadas”. Vinculando este concepto a las personas que huyen de la guerra de Siria e intentando diferenciarlo del concepto “migración” o el de “personas migrantes”. En este sentido, es importante resaltar dos cuestiones.

La primera es que las personas refugiadas son todas aquellas que tienen un temor fundado de ser perseguidas por diferentes causas, no solo por la guerra. La ideología política sí, pero también la religión, la nacionalidad, la raza, el género, la identidad de género o la orientación sexual pueden ser causas que originen la persecución y produzcan la huida. Persecución, que por otro lado, debe ser entendida como una violación grave, sistemática o sostenida de los Derechos Humanos. Incluyendo la discriminación.

Pero además no se debe olvidar que hay personas que si bien no podrán demostrar su condición de refugiadas, sí pueden ser merecedoras de protección subsidiaria. Se trata de una figura jurídica de protección que no implica los mismos requisitos y que abre otras posibilidades ante violaciones graves de derechos o tratos inhumanos y/o degradantes que pudieran sufrirse en caso de retornar al país de origen.

B) El abanico de posibles persecuciones, desgraciadamente, es muy amplio, demasiado... Hablar solo de la guerra implica invisibilizarlas y por tanto, dificulta su protección. No caigamos en este error.

La segunda es que el afán por diferenciar las migraciones y catalogarlas de manera diferente ha entrañado tradicionalmente la ocultación de la realidad de las personas refugiadas, ya que, calificándolas como migrantes quedamos exentos de la obligación de protegerles. Lo cierto es que **la línea que diferencia los distintos tipos de migración, y por tanto, a aquellas que migran de manera voluntaria de aquellas que lo hacen de manera forzada, es cada vez más difusa.** ¿Se desplaza voluntariamente aquella persona que busca un nuevo lugar para vivir porque se le ha privado de toda posibilidad de desarrollo en su tierra? o ¿Quién se ha visto despojado de sus tierras en nombre del desarrollo?

¿Acaso el art.25 de la declaración de los Derechos Humanos no dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado? Un nivel que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Además de revisar cuales son los derechos vulnerados desde una perspectiva universal, indivisible e igualitaria, habrá que indagar en cuál es el papel del Estado al respecto. Verificar si cumple con su papel protector y garante de los derechos de la ciudadanía. El debate es cuanto menos, complejo.

Categorizar las migraciones de manera reduccionista, ha conllevado una interpretación restrictiva o limitada de la Convención de Ginebra, y la denegación sistemática de la protección a miles de personas. A lo largo de 2015, hemos podido comprobar nuevamente el precario compromiso del Gobierno con las personas refugiadas; **apenas 220 personas lograron el estatuto de refugiado, y 800 personas la protección subsidiaria.** El porcentaje de personas que vio rechazada la protección internacional pasó del 56,14% de 2014, al 68,52%. **Y no concedió la residencia por razones humanitarias ni a una sola de las 2.220 personas a quienes denegó la protección internacional.**

Resulta alarmante que frente al aumento de solicitudes de protección de personas que proceden de países en conflicto o donde está acreditado que se vulneran los DDHH, los índices de concesión hayan disminuido. Más de la mitad de los solicitantes procedían de Siria y Ucrania.

Es necesario y urgente debatir desde el rigor sobre los desplazamientos (voluntarios o forzados) desde un enfoque de derechos humanos y su protección integral, bien sean derechos políticos, sociales o culturales.

La externalización de fronteras, la criminalización de las personas que migran, la ocultación de la violencia en las fronteras y las denegaciones de protección, nos llevan a concluir que; el sistema de asilo actual está previsto para que las personas no salgan de sus países. Si salen, para que no lleguen. Si llegan, para que no pidan protección y si lo piden, para que se deniegue.